



Sociedad civil y transiciones al postextractivismo: Ensayos, dinámicas y lecciones

Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas

Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES)

Introducción

Las actividades extractivas, como la explotación minera o petrolera, han generado reacciones encontradas desde la sociedad civil. Vastos grupos ciudadanos han apoyado ese tipo de apropiación intensiva de los recursos naturales, ya que lo entienden indispensable para el desarrollo, e incluso lo valoran como una expresión de progreso. Pero también han existido fuertes reacciones desencadenadas por sus impactos sociales y ambientales.

En el pasado, esos vaivenes eran propios de algunos países, e incluso estaban restringidos a algunas localidades. Pero en los últimos años esta situación se ha generalizado, ya que el extractivismo se ha expandido y profundizado. El alza de los precios internacionales de

las materias primas y los energéticos, y la demanda sostenida, hacen que el extractivismo se intensifique y llegue a nuevas localidades.

Los debates sobre el extractivismo se diversifican. Algunos reclaman una participación más justa en sus beneficios económicos, otros reclaman el cuidado ambiental o las garantías en sus derechos. Los impactos son tan graves, según algunos, que se debe suspender el extractivismo. Estas posturas se traducen en múltiples expresiones, desde denuncias al bloqueo de caminos, desde protestas locales a marchas nacionales. Han dejado de ser hechos aislados y, actualmente, hay diferentes tipos de protestas en los doce países sudamericanos.

Entretanto las respuestas estatales son limitadas debido a que son activos promotores del extractivismo. En unos casos intentan manejar las demandas ciudadanas, pero en general optan por negar o minimizar sus impactos y, una vez que estallan los conflictos, buscan desactivarlos, llegando incluso a la criminalización y represión de la protesta ciudadana.

Es en este contexto, en el cual han surgido las discusiones ciudadanas sobre el postextractivismo, término que aquí se utiliza para describir las alternativas de salida del extractivismo y de las estrategias de desarrollo que lo hacen posible. Las organizaciones ciudadanas no se contentan con posiciones reactivas y comienzan a explorar otro tipo de desarrollo que no dependa, por ejemplo, de la minería o los hidrocarburos. Muestras de estos esfuerzos son el llamado a la moratoria petrolera en la Amazonía de Ecuador o la campaña sobre “Alternativas al Extractivismo” en Perú.

En el presente capítulo se analizan y discuten algunas de estas experiencias ciudadanas en explorar el postextractivismo. Se enumeran las tendencias recientes y, en particular, se describe la campaña realizada en Perú entre el 2010 y 2011. Nuestro objetivo es hacer visibles las experiencias en distintos países y ofrecer algunas evaluaciones iniciales de estos primeros pasos y, en particular, ofrecer elementos de guía para alentar nuevas campañas y fortalecer las que están en marcha.

Puntos de partida: precisando conceptos

Es necesario definir algunos conceptos utilizados en el presente capítulo. Se entiende por extractivismo a los emprendimientos que se apropian de grandes volúmenes

de recursos naturales, los que no son procesados, o lo son en forma limitada, y son exportados como materias primas (o *commodities*) (véase Gudynas 2009 por esta definición). Es importante tener presente que, bajo esta definición, el extractivismo no es una “industria”, es dependiente de los mercados globales y, además de incluir a los emprendimientos clásicos en minería e hidrocarburos, también corresponde a actividades como los monocultivos de exportación, algunas pesquerías, etc.

Los casos que se describen se basan tanto en nuestras experiencias concretas desde organizaciones ciudadanas, como el acompañamiento de otras organizaciones y la revisión bibliográfica.

En el caso de uno de nosotros (AA), se abordó el tema del extractivismo en el marco del trabajo que viene realizando la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE) en Perú, en el seguimiento (desde una perspectiva de derechos y sostenibilidad) del comercio y las inversiones. Desde el monitoreo de la negociación e impacto de los acuerdos comerciales (Tratados de Libre Comercio - TLC) y los marcos de protección de inversiones a través de los Acuerdos Bilaterales de Inversión (BIT), se constató la acelerada inserción del Perú en la globalización, lo que refuerza su rol primario exportador del país. En el contexto del incremento de los precios internacionales de las materias primas, se han profundizado las políticas para facilitar la inversión (nacional y extranjera) para la explotación de esos recursos. La RedGE aborda este tipo de temas con investigaciones y acciones de incidencia y campañas.

Paralelamente, en el caso de otro de nosotros (EG), las evaluaciones en desarrollo y ambiente de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), identificaron al extractivismo como una de las presiones sociales y ambientales más agudas del continente. Se han acompañado o colaborado con iniciativas ciudadanas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. En cada uno de esos países, el centro posee distintas contrapartes y aliados con los cuales explora los impactos del desarrollo convencional actual, en especial de las distintas formas de extractivismo y sus alternativas de salida.

A su vez, RedGE y CLAES mantienen una intensa colaboración en Perú desde el año 2007, promoviendo espacios de capacitación y discusión de alternativas en torno de la sostenibilidad de los modelos de desarrollo y la inserción en la globalización.

A partir de estas experiencias, presentamos seguidamente una revisión de la situación continental y en detalle la iniciativa peruana.

La difusión de las reacciones frente al extractivismo

La exploración de alternativas postextractivistas es un resultado directo de las experiencias y aprendizajes de la sociedad civil frente al extractivismo. Es necesario revisar, al menos resumidamente, algunas de esas tendencias recientes antes de abordar el papel de la sociedad civil en el postextractivismo.

En todos los países andinos se observan intensos debates frente al extractivismo. En Perú existe una larga historia de resistencia social frente a la minería y algunos casos son reconocidos mundialmente (por ejemplo, las consultas en Tambogrande y Majaz; véase, por ejemplo, De Echave y colab. 2009). El incremento de concesiones y el inicio de emprendimientos en minería y petróleo incentivaron las resistencias locales y nacionales (Scurrah 2008). También existe una experiencia muy rica en organizar redes nacionales o regionales, tales como CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería) y un proceso de fortalecimiento de organizaciones indígenas amazónicas como AIDSESP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana). En los últimos años, estas organizaciones han reforzado su incidencia nacional en torno del desarrollo y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, en sus cuestionamientos al extractivismo y en las discusiones sobre la Ley de Consulta.

En otros casos prevalece el rechazo al extractivismo. Entre los ejemplos más recientes se destacan las protestas en Puno frente al proyecto Santa Ana (2011) y, en Cajamarca, ante el emprendimiento Conga de la empresa Yanacocha (2012). Este último caso derivó en la significativa Marcha Nacional del Agua (2012), que movilizó a más de un millar de activistas en una larga caminata desde las lagunas de Conga en Cajamarca, hasta la ciudad de Lima. En ambos procesos se cuestionaron las autorizaciones de explotación otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas.

Entretanto, en Bolivia se repite la oposición al extractivismo. Este ocurre, por ejemplo, en conocidas áreas mineras andinas o nuevos emprendimientos como El Mutún y ante el manejo petrolero en el departamento de Tarija (véase la revisión de Ribera 2010). Se volvió muy visible la oposición indígena en el oriente del país a la construcción de una

nueva carretera, que en parte se debe a los temores frente al ingreso de empresas mineras y petroleras. Este conflicto desembocó también en una gran marcha nacional (2011).

En Ecuador se mantienen acciones ciudadanas contra la contaminación originada por la explotación petrolera, destacándose las repetidas denuncias de derrames de crudo en la Amazonía, así como la enorme demanda judicial contra la empresa Texaco-Chevron. Más recientemente se han sumado protestas frente a liberalización de la megaminería. Así, se realizó con éxito una consulta local (en Azuay 2011) y la firma del primer contrato de gran minería desembocó en una marcha nacional por el agua y la dignidad de los pueblos indígenas (2012).

Situaciones similares se observan en Colombia, donde grupos indígenas y locales resisten la expansión de empresas mineras como, por ejemplo, sucedió recientemente en el departamento César contra la minera brasileña Vale (2012).

En Venezuela también se registran denuncias por derrames y contaminación (el más reciente, un severo vertimiento en el río Guarapiche, Estado Monagas, en febrero de 2012). Aunque en menor grado, también ocurren protestas y resistencias contra la minería (es el caso de la oposición ciudadana a la explotación de carbón).

En Chile, las reacciones ciudadanas frente al extractivismo tienen una larga historia. Entre los conflictos recientes se encuentran, por ejemplo, denuncias por los impactos del proyecto Pascua Lama, oposición al emprendimiento El Morro y crecientes movilizaciones en la región de Calama por reclamos heterogéneos, incluyendo aspectos sociales, económicos y ambientales. Por diversos motivos, tales como su contexto político y su consolidada minería, las reacciones ciudadanas aparecen como de menor intensidad a lo que se observa actualmente en los países andinos.

En Brasil existen muchas acciones a nivel local, tanto frente a algunos emprendimientos mineros y petroleros, como con monocultivos de exportación. Recordemos que Brasil se ha convertido en el mayor productor minero del continente. Sin embargo, más allá de las protestas locales, los niveles de coordinación nacional son limitados; se enfrentan limitaciones importantes para nacionalizar el debate sobre el extractivismo. Entre algunos esfuerzos importantes se encuentra una red de afectados por la empresa minera Vale (y que busca expandirse internacionalmente) y, en 2011, se lanzó un

observatorio ciudadano sobre la explotación petrolera en la plataforma oceánica y que además abordaría la minería.¹

En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay también se observan denuncias y resistencias frente al extractivismo, expresado en los monocultivos de soja transgénica orientados a la exportación. En efecto, con distinta intensidad hay reacciones sociales contra el avance de la frontera agrícola, la deforestación, el uso de agroquímicos y el desplazamiento de pequeños agricultores o campesinos (véase, por ejemplo, a Seoane y Tadei 2011).

Aunque los países del cono sur no eran tradicionalmente mineros, esta condición está cambiando. La minería se está expandiendo en Argentina, lo que desembocó en intensas reacciones ciudadanas. En algunos casos se alcanzaron normas provinciales que impiden o limitan la minería e, incluso, una ley de defensa de los glaciares andinos (aunque fue vetada por el gobierno de Cristina F. de Kirchner y que según distintos analistas, ello se debió a las presiones de la corporación minera; Bonasso 2011). En la actualidad hay movilizaciones ciudadanas en por lo menos 12 provincias, donde en algunos casos han eclosionado en intensas protestas (cortando carreteras, por ejemplo) (algunos casos en Colectivo Voces de Alerta, 2011) y entre las más recientes sobresale la cohesiva oposición local a la minería en Famatina (2012). También se destaca que la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), una red a escala nacional con más de 50 organizaciones participantes, se ha expresado repetidamente contra la megaminería. Es una articulación particular, ya que explícitamente se define como un espacio de articulación e intercambio, concretado en sucesivos encuentros, y carece de autoridades, coordinadores o voceros.

En Uruguay se ha organizado una variopinta resistencia contra los planes de iniciar la megaminería de hierro a cielo abierto, alentados por la administración de izquierda de José “Pepe” Mujica. El emprendimiento, conocido como Aratirí, abarcaría una superficie muy importante (en proporción al tamaño del país), en zonas de tradicionales usos agrícola-pastoriles. Rápidamente estalló una protesta ciudadana, policlasista (desde hacendados rurales a grupos ambientalistas), y que se desenvuelve al margen de los partidos políticos, aunque estos también participan del debate.²

1 Promovido por IBASE, FUP, Greenpeace Brasil y Justicia nos Trilhos; www.observatorio-odopresal.com.br.

2 Se conformó el Movimiento por un Uruguay Sustentable; véase www.observatorio-minero-del-uruguay.com/2011/06/por-un-uruguay-sustentable/

Finalmente, en Guyana y Surinam existen protestas, especialmente por comunidades y grupos indígenas, contra la minería. Por ejemplo, en Guayana se registran diversas denuncias y protestas contra la minería de oro, tanto de pequeña como gran escala (IHRC, 2007).

A nivel continental, existen varias iniciativas frente al extractivismo. Existen agrupamientos que se enfocan en el seguimiento e intercambio de experiencias, entre los que destacan el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), que reúne a más de 30 instituciones³, y la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas, donde se encuentran varias ONG de países andinos.⁴ Entre las organizaciones de cooperación, distintos integrantes de OXFAM han mantenido campañas de incidencia nacionales o internacionales, apoyando estudios de casos y publicaciones de enorme importancia. También existen redes de información y coordinación a escala global, donde se incorpora a América Latina; entre ellas se destacan, para el caso de la minería, Minas y Comunidades (MaC)⁵, y para la explotación petrolera, OilWatch⁶.

Esta muy breve lista de ejemplos sirve para destacar algunos puntos clave en el presente análisis. En primer lugar, la oposición ciudadana al extractivismo no representa casos excepcionales ni aislados, sino que se está volviendo la condición de base en todo el continente. En segundo lugar, se debe advertir que existen, sin duda, muchas diferencias entre estas distintas expresiones, pero además, sus contextos políticos son muy diversos, de donde resultan distintas opciones para expresarse. A pesar de todo esto, se puede señalar que, en tercer lugar, el extractivismo está llegando a un límite democrático en varios países. En cuarto lugar, en varias de esas reacciones ciudadanas se sostiene que el extractivismo no es una estrategia viable ni sostenible en el mediano y largo plazo, se rechazan las repetidas indicaciones de sus supuestos beneficios y, por el contrario, se alerta sobre sus impactos negativos. En quinto lugar, en casi todas estos casos, el Estado no contribuye efectivamente a solucionar los conflictos ni a buscar alternativas de desarrollo, sino que al apoyar el extractivismo se vuelve en uno de los problemas con los que deben lidiar las organizaciones ciudadanas. Bajo

3 Véase www.conflictosmineros.net

4 Participan CEDLA (Bolivia), Fundación Jubileo (Bolivia), IBASE (Brasil), TERRAM (Chile), Foro Nacional Colombia, CDES (Ecuador), Grupo FARO (Ecuador), FUNDAR (México), Grupo Propuesta Ciudadana (Perú), DAR (Perú), Cooperación (Perú); promovida por Revenue Watch.

5 Véase www.minesandcommunities.org

6 Véase www.oilwatchesudamerica.org

este tipo de condiciones, las expresiones ciudadanas comenzaron a considerar las alternativas al extractivismo.

Alternativas al postextractivismo desde la ciudadanía

En buena parte de las reacciones frente al extractivismo se incluyen componentes propios de alternativas, tales como proteger territorios, corregir y erradicar impactos sociales o ambientales, lograr compensaciones económicas o conseguir una mayor coparticipación en los beneficios del extractivismo. Estos y otros aspectos representan intentos para gestionar los impactos negativos, asegurar compensaciones y recuperar ciertas formas de gobernanza (véase, por ejemplo, ese abordaje en la nueva agenda minera propuesta por De Echave y colab. 2009). Este primer nivel de alternativas apunta a reformas en muchos casos instrumentales a las estrategias de desarrollo, incluyendo, por ejemplo, una nueva gobernabilidad en el sector, con mejores regulaciones sociales, ambientales y económicas.

Pero poco a poco también comenzaron a incorporarse otras críticas que abaraban temas como los derechos, el manejo de los territorios o la justicia, de donde se discutía sobre las estrategias de desarrollo (sobre estos y otros abordajes, véase, por ejemplo, a Svampa 2011). Esto desembocó en que se cuestionara no solo el extractivismo, sino las estrategias de desarrollo que lo hacen posible. Consecuentemente, se debió atender el campo de las alternativas, incorporando una perspectiva de más largo plazo, que discute las consecuencias de la dependencia extractivista y la necesidad de repensar las estrategias de desarrollo. Es desde este flanco desde el cual aparecen los abordajes postextractivistas (y que se presentan en otro capítulo en el presente libro; Gudynas y Alayza).

En repetidas ocasiones, los defensores del extractivismo cada vez que escuchaban los cuestionamientos ciudadanos sobre sus impactos negativos, lanzaban una pregunta desafiante: ¿cuáles son sus alternativas? Se sostenía que si la sociedad civil criticaba el extractivismo actual, debía entonces presentar una alternativa superadora. La necesidad de responder ese tipo de preguntas fue otro de los disparadores para adentrarse en el postextractivismo.

Posiblemente, el ejemplo más temprano de una iniciativa postextractivista ocurrió en Ecuador, en el 2000, a partir de las disputas sobre los impactos sociales y ambientales

de la explotación petrolera en la Amazonía. En ese momento, algunas organizaciones ambientalistas propusieron transitar hacia un Ecuador postpetrolero, donde se debían aplicar moratorias a nuevas explotaciones de hidrocarburos (Martínez 2000).

Los cambios políticos en los países andinos que tuvieron lugar durante la década de 2000, facilitaron avanzar en esa perspectiva en los años siguientes. Más recientemente aparecen los primeros ejemplos en el Cono Sur. Es así que nos encontramos frente a un proceso vivo, donde se están encontrando actores y experiencias diversas que coinciden en la necesidad de postular agendas postextractivistas, desde diferentes escenarios sociales, políticos y académicos.

En Ecuador, la idea de un país postpetrolero retornó al poco tiempo, en la en la primera etapa del gobierno de Rafael Correa, cuando el entonces ministro de Energía, Alberto Acosta, recordó aquellas ideas para proponer una moratoria de la explotación en la zona del Parque Nacional Yasuní. La propuesta se articuló de diferentes maneras con las innovaciones de la nueva Constitución de Ecuador, como los derechos de la Naturaleza, o el régimen del “Buen Vivir” que redefine el desarrollo convencional.

De esta manera, la discusión ecuatoriana sobre una moratoria petrolera dejó de estar únicamente enfocada en su validez (o sea, sobre la posibilidad de renunciar a explotar ciertos yacimientos de hidrocarburos), sino en las formas bajo las cuales podía llevarse a la práctica. Allí surgen las diferentes visiones sobre esta iniciativa, unas defendidas por el gobierno, otras por la sociedad civil (ilustradas en la recopilación de Martínez y Acosta 2010).

El proceso ecuatoriano también muestra cómo iniciativas que provienen desde la sociedad civil pudieron formalizarse en el contexto de profundos cambios políticos y gubernamentales que ocurrieron en algunos países. Así, algunas demandas sociales se convirtieron en derechos constitucionales (es el caso de los derechos de la Naturaleza) y estos, a su vez, permitieron fortalecer iniciativas de políticas públicas nacionales postextractivistas (como fue el caso de impedir la explotación petrolera en la región de Yasuní).

Si bien las diferentes formas de entender esta moratoria petrolera escapan al presente capítulo, aquí se debe subrayar que con este caso se instaló a escala nacional un debate sobre las vías posibles para salir de la explotación petrolera tradicional. Esta es una discusión sustancialmente distinta a aquella donde solo se alerta sobre los impactos o se

reclaman compensaciones por ellos. En efecto, en este caso se busca evitar un recorrido extractivista y la discusión está centrada en cómo hacerlo (y no en cómo mitigarlo o compensarlo). De esta manera, este postextractivismo inicial también expresaba alternativas al desarrollo convencional que tradicionalmente había seguido Ecuador.

En Bolivia, como ha sucedido con otros gobiernos progresistas, el Estado intentó desandar las reformas neoliberales, de donde su énfasis apuntó a recuperar el papel del Estado en el extractivismo y captar una mayor proporción de sus beneficios económicos. En ese contexto, muchos actores de los movimientos ciudadanos se enfocaron en reformar el extractivismo y, en especial, en cuestiones como el aumento de las regalías. Pero al poco tiempo, surgieron demandas ciudadanas que cuestionaban las propias bases del énfasis extractivista, estuviera en manos del Estado o a cargo de empresas privadas.

Se conformaron dos posturas que quedaron en claro en el encuentro internacional de cambio climático, organizado por el gobierno de Evo Morales y algunas redes ciudadanas aliadas, en Cochabamba (2010). El objetivo gubernamental fue enfocarse en el cambio climático como una cuestión ambiental a escala planetaria, pero evitando que se consideraran los problemas ecológicos que ocurrían dentro de Bolivia, donde el extractivismo tiene enormes responsabilidades. Esto llevó a que distintas organizaciones ciudadanas tuvieran que organizar una mesa de trabajo fuera de programa para atender esos impactos locales (la llamada “mesa 13”).

A partir de esas circunstancias se incrementaron, o se hicieron más visibles, los conflictos ciudadanos frente al extractivismo y, en algunos de ellos, se integraron visiones alternativas. Entre ellas se destacan las invocaciones al Buen Vivir y a la Pacha Mama y reclamos por manejos territoriales integrales. Algunas de estas ideas reaparecen en la marcha indígena lanzada en agosto de 2011, en oposición al plan gubernamental de construir una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isoboro Sécore (conocido como TIPNIS). Esta dinámica desembocó en que se ampliara el debate sobre el extractivismo y comenzaran a organizarse discusiones sobre alternativas en minería, energía, ambiente y gestión territorial.

En Perú, la última década estuvo caracterizada por el incremento acelerado del extractivismo, y con ello se multiplicaron los cuestionamientos y los conflictos. Como se indicó arriba, se desarrollaron resistencias desde organizaciones locales (como,

por ejemplo, los frentes de defensa del medio ambiente) y nacionales (como AIDSESP y CONACAMI), junto al papel que desempeñan distintas ONG y expertos. Como producto de estas resistencias, se ha conformado una amplia agenda para atender la gobernabilidad en el sector extractivo (que incluye la ley de consulta, ordenamiento territorial, procedimiento de otorgamiento de concesiones mineras, entre otras). En el marco de las elecciones nacionales del 2011, la urgencia de reforzar la incidencia de cara al nuevo gobierno en búsqueda no solo de reformas o mitigación a los impactos, sino de cambios en las estrategias de desarrollo, desembocó en una campaña nacional de alternativas al extractivismo (se la describe con mayor detalle más abajo).

En cambio, en Colombia prevalece, por ahora, el cuestionamiento al extractivismo sobre la búsqueda de alternativas postextractivistas. En ese país persiste un dramático contexto de violencia y un estilo extractivista convencional, de corte empresarial y transnacionalizado, con altos impactos. Por ello, la resistencia ciudadana está enfocada en esa urgencia y las opciones de reclamos y oposición padecen de enormes limitaciones y riesgos. La consideración sobre una agenda postextractivista comenzó a fines de 2011 por un colectivo de organizaciones ciudadanas y académicas.⁷

Paralelamente, en los países del Cono Sur se debatían, en particular, los impactos de la vertiginosa propagación de la soja y como representa un extractivismo agrícola, las propuestas de alternativas también se correspondían a un postextractivismo. De esta manera, en esos países se gestó una discusión embrionaria que se recostaba en alternativas como la agricultura orgánica. Asimismo, otro flanco de aportes provino de los modelos de desarrollo sostenible a escala continental, en los que varios de sus componentes han sido retomados en la actual discusión.

Pero el avance de las explotaciones mineras y petroleras potenció el interés en explorar alternativas. Es así que, por ejemplo en Argentina, en el último año, tuvieron lugar los primeros encuentros y discusiones sobre postextractivismo, incluso analizando sus vinculaciones con los derechos de la Naturaleza (un tema que hasta hace poco era esencialmente andino).⁸

7 El grupo de organizaciones que viene discutiendo estrategias postextractivistas incluye a la Corporación Mujeres y Economía, Fundación Comunidades Unidas Pto. Boyacá, Viva la Ciudadanía, Grupo de Investigación Política y Derecho Ambiental CAMPO, Ciase, las universidades Minuto de Dios, Nacional y la Salle; CENSAT; etc.

8 Entre las instituciones más activas se encuentran una asociación de abogados ambiental-

En Uruguay, una rápida sucesión de hechos permitió pasar de las tímidas discusiones sobre el extractivismo, a un debate a escala nacional, que abarcaba distintos sectores sociales y a todos los partidos políticos. En este caso, se destaca el proceso de “juicio ciudadano”, promovido por la universidad estatal y que por su dinámica y contenido obliga a discutir la minería en el contexto de los desarrollos posibles.⁹

En nuestros registros, no existe todavía una discusión significativa sobre postextractivismo en los sectores mineros y petroleros en Brasil. Han tenido lugar algunos abordajes promovidos por algunos académicos o militantes (por ejemplo, Verdum 2009), pero las grandes redes ciudadanas todavía no lo han tomado como un elemento central.

En varios de estos países, la discusión originada por la mirada postextractivista no está restringida a sectores como minería, hidrocarburos o monocultivos, sino que se ha ampliado a otros temas. Es que una de las consecuencias de esta interpelación es comenzar a debatir sobre las estrategias de desarrollo del país, los flujos de capital, las políticas de atracción de inversiones, el papel del Estado, la forma de asignar el gasto público o los modos de participación ciudadana. De esta manera, la sociedad civil promueve un amplio debate sobre el desarrollo y la democracia.

La campaña peruana de alternativas al extractivismo

Desde un punto de vista comparativo, las recientes movilizaciones y campañas postextractivistas en Perú, aparecen como las más originales y con avances significativos. Comencemos por destacar que en este país, en un pasado reciente, postular que existen “alternativas” al extractivismo no era sencillo. En efecto, culturalmente se acepta la minería como una actividad necesaria y natural; ella es parte de una herencia cultural que se origina en tiempos precoloniales, se reforzó en tiempos de la dominación española y se profundizó más durante la república. Siempre se ha concebido a Perú como un país minero y esta idea está profundamente arraigada.

Por lo tanto, el planteo de alternativas de salida a la dependencia extractiva enfrentaba muchas resistencias. Esto no quiere decir que no existieran duros debates alrededor del

istas (AADI), ONG como CEPPAS y Jóvenes por la Igualdad, y un colectivo de académicos y militantes, Voces de Alerta. Véase <http://postextractivismo.blogspot.com/>

9 El proceso de Juicio Ciudadano es convocado por la Unidad de Ciencia y Desarrollo, Facultad de Ciencias, Universidad de la República; más información en <http://www.juicio-ciudadano.org/mineria/>

extractivismo, sino que estos, en general, se centraban en reformarlo y, en particular, buscaban optimizar sus aportes a los ingresos nacionales. Para muchos actores críticos, varios de ellos en partidos de izquierda, sindicatos y en algunos movimientos sociales, el extractivismo no era cuestionable en sí mismo, sino por su limitado aporte a la economía nacional, lo que explica que sus luchas se enfocaban en cuestiones como la nacionalización, la industrialización o una mejor redistribución de la renta, aunque con ello legitimaban ese tipo de desarrollo.

Una dinámica muy similar ha tenido lugar en todos los demás países sudamericanos, ya que prevalecían posturas donde la alternativa en realidad se enfocaba en recuperar el papel del Estado, aumentar las regalías, aplicar mejores regulaciones sociales y ambientales y otorgar adecuados sistemas de compensación económica. En cambio, el llamado a las “alternativas” al extractivismo implica un cuestionamiento a la idea misma de ese estilo de desarrollo, más allá de la participación que pudiera tener el Estado o los niveles de compensación.

Esta particular situación determinó que inicialmente las discusiones sobre las alternativas al extractivismo fueran abordadas, sobre todo, en algunos espacios académicos, técnicos de ONG o líderes sociales de larga trayectoria. Su repercusión en la opinión pública era muy escasa y la consideración política muy limitada.

Esa situación cambió en los últimos años. Factores como el aumento de concesiones, los graves impactos sociales y ambientales, los repetidos conflictos ciudadanos y las amenazas a la gobernabilidad democrática, hicieron que la discusión sobre alternativas comenzara a ocupar un espacio central en Perú. Comenzaron a expresarse diferentes modos de entender el desarrollo en las disputas sobre el acceso a recursos naturales esenciales, como tierra y agua.

Este nuevo abordaje avanzó sustancialmente en los años 2009 y 2010, dado que la opinión pública profundizó su disconformidad con el extractivismo convencional y se acumularon muchas experiencias negativas entre las organizaciones ciudadanas (incluso, desde Perú se observaban los efectos igualmente negativos de las estrategias volcadas a un extractivismo con mayor presencia estatal en Bolivia y Ecuador).

La crisis en la ciudad de Bagua, Amazonas (2009), generó un vuelco en la opinión pública nacional. Aquella violenta represión en contra de pobladores y organizaciones

indígenas movilizados, que dejó un saldo de más de una docena de muertos, cosechó un rechazo ciudadano evidente y el debate postextractivo avanzó un poco más. En aquellos momentos, también se cuestionaban casi un centenar de decretos legislativos del gobierno de A. García, vinculados a la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que debilitaban la protección de estándares ambientales (Ley de Bosques) y derechos ciudadanos (Ley de Consulta). Allí se aprobaban medidas de facilitación del comercio exterior y la atracción de inversiones, para fortalecer un extractivismo clásico. Por lo tanto, el debate sobre la inserción internacional del Perú en buena medida requería repensar su estrategia extractivista.

En este contexto de alta conflictividad y movilización social, distintas movilizaciones, reclamos y campañas (que iban desde el comercio exterior a la preservación de la Amazonía), se acercaban entre sí. Esto permitió que muchas organizaciones ciudadanas iniciaran un trabajo conjunto en la búsqueda de alternativas. Es en estas circunstancias que se desarrolló entre 2010 y 2011 la campaña “Alternativas al Extractivismo”, con una gran riqueza en sus expresiones, que dejó muchas lecciones para observar con atención.¹⁰ Seguidamente, se describen los componentes de esa campaña.

Elaborando los argumentos: ¿Postextractivismo en el Perú?

Los primeros pasos respondieron a la necesidad de coordinación entre distintos actores y movimientos, para así lidiar con las aceleradas reformas que facilitaban el extractivismo. Confluían en esa preocupación actores con distintos énfasis y urgencias, incluso diferentes posturas culturales, pero que acordaban en la necesidad de enfrentar las repercusiones del extractivismo. A esto se sumó el encuentro entre los trabajos en formación y discusión de la RedGE en Perú y las reflexiones sobre transiciones y postextractivismo iniciadas por CLAES.

Seguidamente, se conformó un grupo de trabajo de expertos¹¹ para conocer, discutir y enriquecer desde la experiencia peruana, aquella perspectiva del postextractivismo. Este fue el primer paso formal de lo que luego sería la campaña Alternativas al Extractivismo. La conformación de ese grupo de expertos partía de constatar que, a pesar de la activa agenda de trabajo y propuestas sectoriales frente al extractivismo, cada una con sus

10 Informaciones, reportes y documentos sobre la campaña en <http://alternativasalextractivismo.blogspot.com/>

11 Este grupo incluyó a J. Azpur, Claudia Viale, C. Monge, J. de Echave, Martin Scurrah, E. Ráez Luna, C.L. Gamboa, V. Sotelo, P. Francke, J.C. Sueiro, A. Mendoza, y A. Alayza.

argumentos especializados, hacía falta promover procesos de confluencia entre esas reflexiones. Los participantes de ese grupo aportaban sus experiencias y conocimientos, conformando un espacio de intercambio y aprendizaje, y desde allí fue posible fortalecer argumentos para pensar alternativas al extractivismo.

El grupo abordó las siguientes tareas: conocer y discutir los conceptos de extractivismo, las estrategias de desarrollo prevalecientes, las opciones postextractivistas, así como informarse sobre algunas de las iniciativas en curso (por ejemplo, la experiencia ecuatoriana de moratoria petrolera en Yasuní). A partir de esas reflexiones, se ajustó el debate y las propuestas de alternativas a la realidad de Perú. Fue posible comenzar a explorar cambios posibles bajo el horizonte de la sustentabilidad y promover el debate sobre la posibilidad de un enfoque postextractivista. Se abordaron cuestiones sectoriales o específicas, tales como las opciones postextractivistas en agricultura, minería, hidrocarburos y pesca, las implicancias para la política económica, el papel de los gobiernos regionales y los territorios, etc.

Posteriormente, se asumió la tarea de presentar y debatir los principales argumentos en una discusión nacional pública. Algunos de los componentes en ese sentido se presentan en el siguiente apartado. Entretanto, las cuestiones referidas a los argumentos fueron ordenadas y recopiladas en un libro sobre transiciones, postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú (Alayza y Gudynas 2011). Se recopilan los estudios de casos para varios sectores (hidrocarburos, minería, agricultura, pesquerías, etc.), incluyendo una evaluación de los impactos económicos de una transición postextractivista. La publicación serviría como documento de referencia de los primeros aportes del grupo y como base para difundir los argumentos e ideas con aliados a nivel nacional e internacional. El libro fue presentado en el marco de la Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social (CONADES 2011), un espacio articulador de las redes, movimientos y ONG a nivel nacional. Esto expresaba la apuesta de los autores por hacer de este libro el punto de partida de un debate nacional, que pudiera compartirse y enriquecerse desde la experiencia de otros actores sociales.

A modo de evaluación de las tareas enfocadas en la elaboración de argumentos, debe subrayarse la rigurosidad y compromiso del grupo de expertos, y la capacidad para cuestionar las propuestas propias, evitando ser complacientes frente a procesos altamente complejos. También fue importante lograr efectividad en las tareas asignadas,

con un buen balance entre productos y encuentros. Antes que un alto número de reuniones, se procuraron encuentros de gran calidad informativa y con objetivos concretos en términos de avances y aportes.

El grupo valoró mucho las sinergias, que se han expresado en la voluntad de coordinación y alimentación recíproca a lo largo del proceso. Esto ha permitido que profesionales de diversas trayectorias e instituciones distintas, cooperen sin competencias, algo que no es raro en circunstancias similares, lo que termina debilitando o bloqueando los procesos.

Por último, cabe resaltar que el grupo de expertos nunca se concibió como un espacio distante de los procesos sociales y políticos. Por el contrario, ya sea reunidos o cada uno desde sus espacios de trabajo, son valiosos diseminadores de la discusión y argumentos, y acompañan distintas iniciativas de la sociedad civil.

Ampliando las alianzas y los espacios de debate

La estrategia de elaboración de argumentos requería, como es natural, de espacios de encuentro y validación con un espectro mucho más amplio de actores sociales. Por un lado, se aprovechó el trabajo en materia de capacitación realizado conjuntamente por RedGE y CLAES desde el 2010, en el marco de cursos nacionales de formación, donde se había constituido un valioso grupo de referentes capaz de reforzar procesos de sensibilización e información sobre postextractivismo. Distintos líderes y profesionales de organizaciones sociales y ONG que asistieron a esos cursos, pasaron a participar en la campaña.

Por otro lado, a inicios de 2011, en el contexto de una competitiva contienda electoral, las diversas organizaciones aliadas se reunieron para promover acciones de incidencia en torno de los candidatos presidenciales. Se formalizó entonces un colectivo de 20 organizaciones y redes nacionales, articuladas en el marco de la campaña Alternativas al Extractivismo.¹² Esta incluyó un conjunto de acciones y actividades de incidencia, que tenía por objeto presentar la idea de alternativas al extractivismo a la opinión pública y que los partidos políticos conocieran y se posicionaran públicamente en torno de diferentes propuestas que favorecían o promovían transiciones postextractivistas.

¹² Los participantes fueron CEPES, DAR, Cooperación, etc.; y redes o asociaciones como la ANC, RedGE, CONADES, etc. La lista completa está disponible en <http://alternativa-salextractivismo.blogspot.com/>

El proceso de trabajo de los participantes en la campaña desplegó las siguientes estrategias:

(a) Posicionamiento conjunto por las alternativas al extractivismo

A partir del aporte de cada organización, se instaló un proceso de discusión y convenios que permitió alcanzar acuerdos comunes en una **Agenda Mínima para las Alternativas al Extractivismo**. En ella se identificaban tanto las medidas urgentes para atender los problemas del extractivismo, en sus dimensiones social, ambiental y económica, como la necesidad de profundizar estrategias para las alternativas de desarrollo. Simultáneamente, se confeccionó una **Guía de preguntas a los candidatos para las Alternativas al Extractivismo**, enfocada específicamente en los partidos políticos. Este fue un medio para incidir directamente en el campo partidario. Más allá de las posibles respuestas de los candidatos, se buscó articular y expresar las principales preocupaciones y propuestas de las organizaciones ciudadanas. Finalmente, las instituciones de la campaña lograron acordar un **Pronunciamiento Público**, con un llamado al nuevo gobierno para que asumiera acciones prioritarias en la gobernabilidad del sector extractivo y acciones para las transiciones postextractivistas.

(b) Debate público e incidencia en la campaña electoral

Una de las acciones centrales de toda la campaña se desplegó en marzo de 2011, con un **Seminario de Alternativas al Extractivismo**. Este evento le dio el nombre a la campaña, y tenía por objetivo combinar tres espacios de discusión y debate: (1) Foro Público Alternativas al Extractivismo, en el que expertos presentaron los distintos temas de discusión y preocupación.¹³ (2) Seminario con organizaciones nacionales, que incluía delegados del todo el país, con los que se discutieron y complementaron los elementos de la Agenda Mínima de Alternativas al Extractivismo para el nuevo gobierno; se trabajó en tres grupos temáticos (que cubrían, respectivamente, los temas de reformas en materia ambiental, social y derechos y económica). (3) Foro Público con los partidos políticos, en el cual participaron representantes designados por los candidatos presidenciales de los principales grupos en competencia electoral y se presentaron las preguntas de la sociedad civil a los candidatos (descritas arriba).

(c) Popularización del debate: acciones en prensa, mensajes y herramientas de comunicación

Las acciones del colectivo de campaña incluyeron un activo esfuerzo de comunicaciones

13 Los panelistas en la mesa fueron Humberto Campodónico, José de Echave, Alberto Barandiarán, Eduardo Gudynas y Alejandra Alayza.

y prensa para impulsar la más amplia cobertura de este debate. Para ello se trabajó en dos sentidos: apoyando y ampliando las vías de difusión de la campaña, y acciones con los medios de comunicación. Entre las acciones emprendidas se destacan las siguientes: Elaboración de mensajes e imagen de la campaña (diseñando su propio logo y, de allí, confeccionando adhesivos, *banners*, etc.). Como el centro estaba enfocado en la campaña en sí misma, esto contribuyó a una unidad en la identificación. Se creó el blog Alternativas al Extractivismo para recopilar informes, noticias de prensa, etc. Se transmitieron los eventos centrales en vivo por internet y se los divulgó por las redes sociales. Se registraron y editaron videos con las ponencias de los participantes para ser utilizados por las organizaciones en las réplicas de las actividades y debates, entre otras. En el campo de los medios de prensa, se elaboraron notas escritas sobre las principales propuestas, se designaron voceros para interactuar con la prensa, y se impulsó la cobertura del debate en los principales medios de prensa escrita y radial del país. Paralelamente, tuvieron lugar acciones específicas para sensibilizar a periodistas en los temas y prioridades de la campaña. En lugar de las clásicas ruedas de prensa o entrevistas, estos eran encuentros distendidos, en alguna medida con un toque de capacitación, donde se discutían las ideas centrales del postextractivismo, donde el objetivo no estaba enfocado tanto en lograr una nota de prensa, sino en que los periodistas comprendieran el trabajo en marcha.

Iniciativas a escala internacional

El abordaje de las opciones postextractivistas a escala internacional dentro de América Latina está dando sus primeros pasos, por medio de actividades de coordinación, intercambio de experiencias y algunas tareas conjuntas.

Como resultado de los talleres, cursos y otros eventos, realizados por CLAES especialmente en las naciones andinas, se concretó recientemente la plataforma “Transiciones”, que es un agrupamiento abierto de organizaciones ciudadanas, por ahora provenientes de Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay.¹⁴ Los participantes están interesados en explorar transiciones alternativas al desarrollo actual, otorgándole una especial atención al postextractivismo.

¹⁴ En este agrupamiento participan la RedGE de Perú, LIDEMA de Bolivia, CEDA de Ecuador y CLAES de Uruguay. Fue presentado formalmente en Cuzco, en el evento convocado por Centro Bartolomé de las Casas y CooperAcción sobre extractivismo en 2011. Véase, además, www.transiciones.org

El Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, convocado por la Fundación Rosa Luxemburgo, aglutina a intelectuales y militantes de varios países y en su agenda de trabajo han incorporado la discusión sobre transiciones; además, está evaluando estudios de caso en Bolivia y Ecuador.

Comparaciones, lecciones y conclusiones preliminares

A partir de esta breve revisión sobre las iniciativas ciudadanas en promover alternativas postextractivistas es posible avanzar a en la presente sección a una discusión que indique algunas lecciones aprendidas, brinde sugerencias para las próximas tareas y enumere algunas conclusiones provisorias.

Comencemos por una evaluación comparativa del estado de las discusiones sobre postextractivismo en los distintos países de América del Sur. Este análisis tiene inevitablemente un componente subjetivo, en tanto está basado en nuestra percepción de las campañas y acciones realizadas, la diversidad y protagonismo de las organizaciones involucradas, su repercusión en los debates públicos y los contenidos de las propuestas.

Comparando la situación de un país contra otro, se observa que las actividades más intensas sobre postextractivismo se encuentran en Perú y Ecuador, seguidos por Bolivia. En una situación intermedia se encontrarían Argentina, Uruguay y Colombia. Le siguen Chile y Paraguay y consideramos que la situación de mayor debilidad se observan actualmente en Brasil y Venezuela.

Debe tenerse presente que esta es una ponderación únicamente comparativa entre los países y que, además, atiende en particular los temas orientados al postextractivismo. La situación en los países andinos es comprensible y se debe a varios factores que han sido comentados antes, y algunos de los cuales se discutirán más abajo. El caso brasileño merece un comentario, ya que si bien hay un número importante de conflictos por actividades extractivas (mineras, petroleras, agropecuaria y forestales), parece encontrarse en una situación distinta a lo observado en los países vecinos. Por un lado, esas luchas locales en su mayoría discurren separadamente unas de otras (por ejemplo, las organizaciones locales afectadas por la minería no necesariamente coordinan con las que enfrentan los impactos del avance de la soja) y el nivel de coordinación nacional es

más débil (no existen, por ejemplo, redes análogas a CONACAMI de Perú con un peso público similar). Por otro lado, la discusión sobre extractivismo promovida por grandes ONG y los académicos, en su mayor parte sigue centrada en cuestiones como el papel del Estado, el nivel de regalías que se aplicará a las nuevas explotaciones petroleras, etc. y no tanto en una alternativa postextractivista.¹⁵

El examen de los actores involucrados en las discusiones sobre postextractivismo encuentra una gran diversidad y no es, por ahora, una cuestión restringida a un movimiento en especial. En unos casos son organizaciones con un alto nivel de estructuración como, por ejemplo, ONG de distinto tipo; en otros casos son redes o agrupamientos más laxos, usualmente calificados como movimientos. Tan solo a manera de ejemplo de esta diversidad, en Ecuador han estado involucradas organizaciones ambientalistas, con un perfil orientado a la militancia y la movilización (es el caso de Acción Ecológica, que mantiene una fuerte campaña en defensa del Parque Yasuní). Otras apoyan actividades de análisis, capacitación y difusión (representado por el Centro Andino de Acción Popular, convocando a talleres sobre alternativas al extractivismo en distintas ciudades y publicando dos números de su revista Ecuador Debate, dedicados a estas cuestiones), y distintas universidades han coorganizado foros de discusión o talleres en estos temas. En Bolivia, en cambio, entre los principales actores de la discusión sobre postextractivismo se encuentra una red en temas de ambiente y conservación (LIDEMA), pero también se vinculan actores que provienen de ONG activas en temas rurales, económicos, etc. y el apoyo de algunos centros académicos.

En estos países se debe destacar el creciente papel de las organizaciones de los pueblos indígenas. Los ejemplos más visibles son, CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) y en parte CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) en Bolivia y la ya citada AIDSESP en Perú. Lo importante de estos y otros aportes es que con ellos se hacen visibles saberes indígenas que nutren de otros componentes las alternativas postextractivistas, como está sucediendo con las ideas sobre Buen Vivir. Por lo tanto, más allá de sus capacidades de movilización y coordinación, estos actores juegan un papel indispensable en diversificar los contenidos del postextractivismo.

15 También debe recordarse que en Brasil existe una larga tradición de "reservas extractivistas", entendidas como áreas protegidas bajo usos humanos regulados, usualmente basados en la cosecha sostenible de productos del bosque tropical. Esto ha hecho que el uso del término "extractivismo" en portugués estuviera asociado a otros contenidos.

Es importante detenerse en algunos comentarios sobre el papel de los actores académicos. En los debates son muy visibles académicos que pueden ser descritos como heterodoxos (con ubicaciones tanto dentro del sistema universitario formal como en ONG). Pero, a nuestro juicio, en varios países, la tendencia general es que las universidades, desde un punto de vista institucional, están distanciadas de los debates sobre el extractivismo o, incluso, apoyan ese tipo de desarrollo. Existen excepciones, pero sobre todo responden a intereses de algunos investigadores y están acotadas.¹⁶ Destacamos el interesante caso del Colectivo Voces de Alerta de Argentina, donde participan académicos de varias universidades y distintas disciplinas (por ejemplo, Colectivo Voces de Alerta 2011). Pero como se indicaba antes, en general los espacios universitarios se mantienen institucionalmente al margen, y hay importantes grupos que, por el contrario, apoyan al extractivismo (usualmente asociados a disciplinas profesionales enfocadas en minería e hidrocarburos).

Esta situación expresa un límite importante en la exploración de alternativas postextractivistas por varias razones. El apoyo de académicos es fundamental en la formulación de escenarios alternativos como, por ejemplo, la reorganización de una economía no extractivista, pero su concurso también es esencial en los debates políticos, ya que varios componentes de los debates alrededor del postextractivismo invocan verdades “científicas” basadas en el saber experto. Por ejemplo, hay críticas contra el postextractivismo basadas en considerarlo como una improvisación carente de base científica. A su vez, desde los sectores extractivos también se generan “alternativas”, como la supuesta “minería sustentable”, revestidas de una supuesta innovación científica y técnica (véase, por ejemplo, a Antonelli 2009). Tampoco puede olvidarse que las universidades y asociaciones profesionales son un espacio clave en la reproducción del desarrollo convencional y, con ello, en defender y difundir el extractivismo clásico. Este tipo de cuestiones hace que necesariamente deban buscarse alianzas con los espacios académicos, promoviendo y apoyando a quienes exhiben otras actitudes en sus prácticas científicas y generan otros saberes.

Así como se han indicado la presencia de variados actores, también es oportuno señalar la ausencia de otros en los debates sobre el postextractivismo. El ejemplo más claro

16 Entre los ejemplos destacados están las iniciativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, como las que desarrollan un grupo de sus antropólogos o su diplomado en industrias extractivas (conjuntamente con Revenue Watch) y, en Bolivia, el centro de investigaciones sobre desarrollo CIDES de la Universidad Mayor San Andrés de La Paz.

son los sindicatos tradicionales, ya que en muchos países sus asociaciones apoyan las actividades extractivas (notablemente en Argentina, Chile, Uruguay y muy visiblemente en Brasil, desde los sindicatos petroleros y mineros).

En cuanto a la dinámica de las discusiones, nuestra revisión permite señalar que un paso clave ocurrió cuando fue posible legitimar ante la sociedad la validez de la idea de posibles alternativas al extractivismo. Pueden distinguirse dos momentos: en el primero, las circunstancias solo permiten un debate acotado, con participación de pocas organizaciones y redes; en el segundo, la ponderación de alternativas se difunde a otros espacios de las sociedades civil y política. El tránsito de la primera a la segunda situación refleja un cambio sustancial que hace posible comenzar a discutir alternativas a la propia concepción convencional del desarrollo con un abanico mucho más amplio de interlocutores.

Poder quebrar aquellas resistencias no es un tema menor ni es una tarea sencilla. En los imaginarios sociales sudamericanos está fuertemente arraigado el concepto de la necesaria explotación de la Naturaleza; es más, algunos países tienen una cultura minera que viene desde las épocas coloniales. Desde ese punto de vista, los problemas no están en evitar el extractivismo, sino que se encuentran en cómo potenciarlo, hacerlo más eficiente y poder obtener mejores ganancias. Es común que esa postura esté reforzada por sus invocaciones a supuestos avances científico-tecnológicos y la promesa del enriquecimiento económico.

De esta manera, cuando se habla de postextractivismo se están cuestionando esas ideas profundamente arraigadas. Las resistencias culturales son importantes y solo es posible adentrarse en esos temas tras superar las barreras indicadas arriba, a partir de lo cual, la idea de otros futuros posibles deja de ser inconcebible, algunos grupos comienzan a reflexionar sobre su necesidad y el postextractivismo se vuelve una cuestión legítima.

Deseamos subrayar que la coordinación entre organizaciones aparece como un elemento de enorme importancia en promover campañas y fortalecer esta discusión. En países como Perú, y en menor medida Ecuador y Bolivia, se lograron conformar coordinaciones o redes, que aunque son de distinto tipo, conquistaron un alcance nacional. Esa coordinación ampliada resultó clave en los casos más exitosos, como el peruano, ya que aumenta las posibilidades de promover agendas alternativas con mayor alcance en la

opinión pública. En el armado de esas coordinaciones es muy importante la diversidad y calidad de los participantes. Observamos, por ejemplo, que la campaña de alternativas en Perú reunió a ONG y redes de muy diversa procedencia, en la que varias de ellas no necesariamente coordinan en otros temas con esos mismos aliados.

Allí donde no se logra este tipo de articulación, las capacidades de nacionalizar la temática se reducen. Este es, posiblemente, uno de los factores explicativos del retraso de Brasil en esta materia (aunque allí hay coordinaciones efectivas y movimientos nacionales en otras cuestiones, como los enfocados en las represas hidroeléctricas o de los sin tierra¹⁷). En Argentina la situación es inusual, ya que una de las redes más importantes (conformada por asambleas ciudadanas), explícitamente evita implantar una coordinación nacional, contar con voceros, etc.

Las coordinaciones estables también descansan en que ese rol sea asumido con energía, y que su papel articulador y moderador sea aceptado por sus distintos participantes. En el caso peruano, la campaña por las alternativas no fue motivo de disputas en el seno de las organizaciones ciudadanas participantes. En cambio, en Bolivia y Ecuador, desde hace años existen al menos dos corrientes para enfocar las dimensiones sociales y ambientales del desarrollo, y esa situación se mantiene por ahora en el caso de las alternativas al extractivismo. Situaciones de este tipo son muy comunes en todos los países y son comprensibles, en tanto esas diferencias responden en parte a distintos contenidos en las demandas, en las estrategias de acción o en el posicionamiento ante la opinión pública.

Identificamos como de gran importancia la posibilidad de articular los temas del postextractivismo dentro de una agenda más amplia enfocada en la crítica al desarrollo convencional. Esto ocurrió tempranamente en Ecuador, donde la consideración de una salida postpetrolera fue vinculada con temas como los derechos de la Naturaleza o las concepciones del Buen Vivir. Más recientemente, esto también se ha observado en Bolivia, a partir del conflicto del TIPNIS, en tanto se pone en el tapete el papel de la administración de Evo Morales frente a la Naturaleza; en Argentina, sobre el papel del gobierno en promover la minería y su discurso que por un lado invoca el nacionalismo productivo, pero por el otro se apoya en corporaciones mineras; y más tímidamente en

17 Véase Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), www.mabnacional.org.br; y Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), www.mst.org.br

Uruguay, debido a las evidentes tensiones entre las aspiraciones mineras y las estrategias agropecuarias o turísticas.

La mirada postextractivista en algunos casos ha logrado grandes pasos iniciales gracias a liderazgos personales. Esto se desprende del caso ecuatoriano, donde el economista Alberto Acosta desempeñó ese papel en la primera etapa del gobierno Correa (ocupando el Ministerio de Energía y Minas), luego como presidente de la Asamblea Constituyente, más recientemente alejado del gobierno y su base de apoyo, pero directamente vinculado a organizaciones sociales e indígenas. Nos encontramos frente a un intelectual reconocido (donde ser economista no es un aspecto menor en estas discusiones), con una clara vinculación con los movimientos sociales y que promueve la temática postextractivista.

En Perú existe un conjunto más numeroso de intelectuales y militantes volcados a estos temas. Varios de ellos participaron en la campaña de alternativas sobre el extractivismo; algunos se desempeñaron en la fase inicial de la administración de O. Humala, pero retornaron a las organizaciones ciudadanas como resultado de diferencias sobre la estrategia minera gubernamental (los casos más claros son José de Echave y Hugo Cabieses, quienes fueron viceministros dentro del Ministerio del Ambiente, pero renunciaron por la agudización del conflicto frente al proyecto minero Conga).

En cambio, este tipo de liderazgo intelectual todavía no es evidente, por ejemplo, en otros países. Tampoco es común que uno o más intelectuales o líderes sociales respetados y con peso político que se desempeñaban dentro de un gobierno progresista, lo abandonaran por discrepancias sobre la agenda extractivista y se volcaran a promover el postextractivismo.

Por ejemplo, en Brasil, Marina Silva fue por largo tiempo ministra del ambiente bajo el gobierno de Lula da Silva y renunció denunciando el debilitamiento de la agenda ambiental del país. Seguidamente, se convirtió en candidata a la presidencia por el Partido Verde. Sin embargo, el postextractivismo no aparece como un elemento destacado ni en su alejamiento del gobierno Lula ni en su plataforma presidencial; su preocupación está en una gestión eficiente de los recursos no renovables.¹⁸

18 A manera de ejemplo, en las directrices de gobierno del Partido Verde "Alianza para un Brasil Justo y Sustentable", se postula que para los recursos no renovables es necesaria una gestión estratégica para garantizar el abastecimiento y al mismo tiempo prepararse para un futuro independiente de estos, donde se debe revisar esos sectores para volver-

En Bolivia ocurre casi el caso contrario, donde uno de sus más conocidos intelectuales, el vicepresidente Álvaro García Linera olvidó sus viejos cuestionamientos al desarrollismo convencional y al papel de las organizaciones ciudadanas y ahora defiende el extractivismo y ataca a las ONG y organizaciones indígenas.¹⁹

Estos y otros casos muestran que al evaluar las formas de interpretar el extractivismo y sus alternativas se deben tener presentes las particulares relaciones de la sociedad civil frente a los gobiernos. Esta situación es especialmente delicada en algunos países bajo gobiernos de la nueva izquierda o progresistas, ya que reciben el apoyo de buena parte de las organizaciones ciudadanas. Esto hace que actores ciudadanos significativos apoyen las estrategias extractivistas progresistas y, por lo tanto, las ventanas para posturas críticas posextractivistas son limitadas.

Este es otro de los factores que seguramente inciden en explicar la situación brasileña. En efecto, en ese país prevaleció una generalizada aceptación de las políticas gubernamentales de Lula da Silva desde buena parte de las ONG, movimientos sociales y sindicatos. En ese escenario, lo que se presentaba como horizonte de alternativas estaba dominado por cuestiones tales como el papel de las empresas estatales, las regalías y su uso en el caso del petróleo, etc.; el postextractivismo ocupó un nicho limitado.

En cambio, allí donde un conjunto significativo de organizaciones y actores lograron recuperar independencia política frente a los gobiernos progresistas, se generó un debate más amplio y vigoroso sobre las alternativas al extractivismo (como son los casos de los países andinos indicados arriba). Esta situación es evidente en Ecuador y Bolivia, está en marcha en Argentina y Uruguay y parece haber tenido lugar, aceleradamente, en el Perú.

A su vez, aunque los gobiernos reaccionan de diferente manera ante las demandas y posturas ciudadanas, como prevalece la defensa del extractivismo, para ellos no tiene sentido aceptar

los más transparentes y competitivos, prevaleciendo aquellos que consigan combinar los mayores royalties y los mejores desempeños sociales y ambientales (Diretrizes Programa Governo 2010).

19 Es notable advertir las diferencias de opinión de A. García Linera sobre la situación del TIPNIS. Mientras que en el pasado defendía a las comunidades indígenas y su participación directa en la gestión territorial (Orozco Ramírez, García Linera y Stefanoni 2006), una vez en el gobierno insiste con la intervención de esa zona y su apertura al extractivismo.

ni participar en considerar alternativas a este. Tanto los gobiernos conservadores como los de la nueva izquierda, desde distintas posturas ideológicas, y por diferentes medios, apoyan el extractivismo y enfrentan los reclamos de la sociedad civil (Gudynas 2009).

Una excepción que debe ser considerada ocurre en Ecuador, donde su plan nacional de desarrollo explícitamente dice estar orientado a reducir la dependencia de los sectores primario exportadores y apuntar hacia la alternativa del Buen Vivir (SENPLADES 2009). En otras palabras, el plan ecuatoriano tiene un contenido postextractivista. Sin embargo, las medidas gubernamentales recientes apuntan en el sentido contrario, ya que se mantiene la promoción del extractivismo petrolero y se lanza a la megaminería. Este es también uno de los gobiernos que critica y ataca con más dureza a las organizaciones ciudadanas que alertan sobre los impactos del extractivismo.²⁰

De manera similar, el gobierno de Evo Morales viene cuestionando directamente a las organizaciones ciudadanas ambientalistas e indígenas por sus advertencias y oposiciones al extractivismo. Ha establecido mecanismos de supervisión y control sobre sus programas de trabajo y financiamientos y, más recientemente, los cataloga como una nueva forma de intervención extranjera o colonialismo.²¹ En Argentina, recientemente se intensificaron los cuestionamientos presidenciales a los movimientos ciudadanos opuestos a la minería, y se ha aprobado una ley sobre terrorismo interno que amenaza a las movilizaciones de la sociedad civil. Estos y otros ejemplos muestran una tendencia donde varios gobiernos buscan controlar la protesta ciudadana, con intentos de reducirla y anularla, o bien, de criminalizarla.

En cambio, en las naciones con una mayor institucionalización y un sistema de partidos políticos legitimados (Brasil, en parte, y especialmente Chile y Uruguay), las demandas se encaminan por canales formales y las campañas son más acotadas. Esto hace que, por ejemplo, en el caso uruguayo, el postextractivismo fluya por canales más formales.

20 La administración Correa califica a las demandas ambientales e indígenas de “infantiles”, rechaza las advertencias sobre los impactos ambientales del extractivismo y muestra muchas contradicciones sobre una posible moratoria petrolera en Yasuní. Los ataques a las organizaciones ciudadanas son repetidos (por ejemplo, en 2009 se retiró la personería jurídica a una importante ONG ambientalista, Acción Ecológica, y fue restituida solo después de una fuerte campaña internacional).

21 Entre los casos más conocidos están las críticas de la administración Morales a ONG como FOBOMADE en el terreno ambiental, CEDLA en cuestiones de economía o CEJIS en asuntos indígenas. También se cuestiona el papel de la confederación indígena CI-DOB.

En los párrafos anteriores, además de discutir algunos aspectos sobresalientes del actual debate ciudadano sobre postextractivismo, también se ofrecen algunas conclusiones. Es oportuno tener presente que estas son inevitablemente provisorias, en tanto nos encontramos frente a un proceso reciente que está en sus pasos iniciales. Dando unos pasos más en esas conclusiones, es necesario subrayar que el abordaje de alternativas al postextractivismo indica que se está cruzando una nueva frontera, desde posturas esencialmente reactivas y contestatarias, a una agenda donde se exploran alternativas de desarrollo, desde debatir sobre extractivismos alternativos, a la idea misma de extractivismo. Incluso bajo los gobiernos que se definen como progresistas, queda en claro que distintos actores de la sociedad civil consideran que es necesario retomar la discusión sobre futuros bajo otros tipos de desarrollo.

El impulso de estos cambios no se origina en los gobiernos o en partidos políticos convencionales y ni siquiera en muchos de los viejos movimientos sociales. Ese impulso proviene en especial desde la sociedad civil involucrada y organizada en distintas formas de denuncia o resistencia frente al extractivismo y de actores que acompañan esas expresiones. El concurso de las organizaciones indígenas se ha vuelto clave, en especial en proveer contenidos que refuerzan los sentidos de alternativas que están más allá del desarrollo convencional de base occidental.

El avance en estos debates requiere de formas crecientemente organizadas pero, flexibles, eficientes e innovadoras, y multisectoriales. Estas son algunas de las principales lecciones que arroja la exitosa campaña de Alternativas al Extractivismo de Perú. Insistimos en que las capacidades de organización y coordinación son elementos indispensables para avanzar en un camino de transformación.

Las experiencias actuales muestran variados avances, a pesar que deben lidiar con distintas resistencias, tanto frente a los gobiernos (que defienden el extractivismo), como ante una difundida cultura de apropiación intensiva de la Naturaleza para alimentar el progreso. A pesar de esas condiciones, la temática postextractivista se está posicionando en varios países, nutriendo de otra manera las discusiones frente a emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas, y también explorando otras opciones de desarrollo.

Bibliografía

ALAYZA, Alejandra y Eduardo GUDYNAS

2011 *Transiciones. Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú*. Lima: CEPES, RedGE y CLAES.

ANTONELLI, Mirta A.

2009 Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura, pp 51-101, En: M. Svampa y M. A. Antonelli (eds.) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires: Biblos.

BONASSO, Miguel

2011 *El mal. El modelo K y la Barrick Gold*. Buenos Aires: Planeta.

COLECTIVO DE VOCES DE ALERTA

2011 *15 mitos y realidades de la minería transnacional en la Argentina*. Buenos Aires: Herramienta y El Colectivo.

DE ECHAVE, José, Alejandro DIEZ, Ludwig HUBER, Bruno REVESZ, Xavier R. LANATA y Martín TANAKA

2009 *Minería y conflicto social*. Lima: Instituto Estudios Peruanos, CIPCA, CBC y CIES.

DIRETRIZES PARA PROGRAMA DE GOVERNO

2010 *Aliança por um Brasil Justo e Sustentável*. Diretrizes para Programa de Governo. Brasília: Partido Verde.

GUDYNAS, Eduardo

2009 "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual". En: Varios Autores, *Extractivismo, política y sociedad*. Quito: CAAP y CLAES: 187-225.

IHRC (International Human Rights Clinic)

2007 All that glitters: gold mining in Guyana. Human Rights Program, Harvard Law School, Cambridge.

MARTÍNEZ, Esperanza (ed.)

2000. *El Ecuador Post Petrolero*. Quito: Accion Ecologica; Comision Nacional Permanente de Conmemoraciones Civicas - CCE.

MARTÍNEZ, Esperanza y Alberto ACOSTA

2010 *Yasuni: Entre el petróleo y la vida*. Quito: Abya-Yala y Universidad Politécnica Salesiana.

OROZCO RAMÍREZ, Shirley, Álvaro GARCÍA LINERA y Pablo STEFANONI

2006 *“No somos juguetes de nadie...” Análisis de la relación de movimientos sociales, recursos naturales, Estado y descentralización*. La Paz: NCCR Norte Sur, COSUDE y Plural.

RIBERA A., Marco O.

2010 *El sector minero. Análisis crítico y problemáticas socioambientales de: megaproyecto Mutún, cuenca del Poopó, cuenca del Pilcomayo, megaproyecto San Cristóbal*. La Paz: LIDEMA.

SCURRAH, Martin (ed.)

2008 *Defendiendo derechos y promoviendo cambios. El Estado, las empresas extractivas y las comunidades locales en el Perú*. Lima: Oxfam, Instituto Bien Común e IEP.

SENPLADES

2009 *Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir. 2009-2013*. Quito: SENPLADES.

SEOANE, José y Emilia TADEI.

2011 *Recolonización, bienes comunes de la Naturaleza y alternativas desde los pueblos*. Rio de Janeiro: GEAL y Diálogo de los Pueblos.

SVAMPA, Maristella

2011 “Extractivismo neodesarrollista y movimientos sociales. ¿Un giro ecoterritorial hacia nuevas alternativas?” En: Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo (eds.), *Más allá del desarrollo*. Quito: AbyaYala: 185-216.

VERDUM, Ricardo

2009 “Os riscos do neo-extrativismo progressista”. *Orçamento e Política Ambiental*, INESC, Brasília, Nº 23.